

A lo largo de 2010, el euro atravesó la primera crisis profunda de su historia. Las alarmas se activaron en abril con el anuncio de las condiciones de la ayuda a Grecia. En mayo, después de que Alemania opusiera resistencia para convertirlo en permanente, la UE aprueba un fondo temporal de rescate dotado de 750.000 millones de euros con participación del FMI, cuyo objetivo era intervenir en los mercados comprando deuda soberana, algo que hasta entonces no se había considerado entre sus miembros.

La creación de este fondo fue una solución de urgencia que obligaba a los países a tomar medidas presupuestarias drásticas que, a pesar de afectar al crecimiento, eran necesarias para que las primas de riesgo volvieran a niveles sostenibles.

La posibilidad de hacer permanente este mecanismo, aprobado sólo hasta 2013, suponía también una modificación del Tratado de Lisboa, que no lo contemplaba. La crisis hizo saltar algunas de las piezas de un Tratado recién estrenado y que había tardado casi nueve años en ser ratificado por todos los países.

En junio se generan otras preocupaciones dentro de la UE. El nuevo Gobierno húngaro acusaba al saliente de haber falseado las cifras del déficit, comparando la situación del país con la de Grecia. La noticia afectaba al euro, ya que gran parte de la deuda pública del país estaba en manos de bancos austriacos y alemanes.

La segunda crisis fue en noviembre y se localizó en Irlanda. El déficit presupuestario y la nacionalización de las pérdidas de los bancos obligaron a que el día 21 de ese mes el país pidiera oficialmente ayuda a la UE.

Desde ese momento la tensión se traslada a otros miembros de la zona euro (Portugal, España e Italia), con elevados déficits públicos que se materializaban en una mayor prima de riesgo sobre la deuda pública, en relación al bono alemán. Para financiar su deuda, los griegos (con 874,03 puntos de diferencia) debían pagar unos tipos de interés nueve puntos por encima de los alemanes (situados en el 2,8%). Los irlandeses (con 534,20) seis, los portugueses (con 308,70) más de cuatro,

y los españoles (con 219,10) llegaron a superar los tres puntos. Los analistas estimaban que entre los 450 y 500 puntos, el rescate era casi inevitable y que cuando el diferencial superaba los 300, el problema empezaba a aparecer.

Estas circunstancias incidieron en la cotización del euro. A principios de noviembre de 2009 se fijaba en 1,48 dólares y un año después lo hacía en 1,42; una apreciación del dólar que aunque sólo fue del 4% no reflejaba un gran bandazo del 20% que se produjo en dirección opuesta a lo largo del año.

Las asimetrías y la falta de coordinación de los gobiernos (con 17 estrategias de política económica y 17 mercados de bonos diferentes), agravaron aún más la crisis.

Como alternativa a los citados desequilibrios se lanzó la propuesta de trabajar en un Gobierno económico de la UE basado en una mayor disciplina y control presupuestario, un mecanismo de vigilancia macroeconómica para reducir las divergencias de productividad según indicadores que se establecerían y, en tercer lugar, el llamado semestre europeo, que entraría en vigor el 1 de enero con una evaluación simultánea de los países cada primavera, tanto de las medidas presupuestarias previstas para cada uno como de las reformas estructurales. Por último, el fondo temporal de estabilidad financiera se sustituiría en junio de 2013 por un instrumento permanente llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Con este panorama de fondo, los ministros de Economía de la UE aprobaron la entrada de Estonia en la zona euro el 1 de enero de 2011, con un tipo de conversión de 15,6466 coronas por euro. Sería el decimoséptimo miembro de la zona.

La noticia levantó polémica al considerarse que se añadía un nuevo riesgo para la estabilidad de la zona, un país de 1,4 millones de habitantes que había experimentado una profunda recesión en 2009, con una caída del PIB del 14%. Sin embargo, cumplía los criterios de convergencia según los informes elaborados por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.

EDUARDO CUENCA GARCÍA Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Granada